

# Actores imaginarios o imaginarios sin actores en la guerra de Colombia

El espectro relacional entre distintas estructuras sociales afectadas por la guerra, los actores involucrados con sus respectivas demandas, los actores inventados que adquirieron su plataforma de lucha en el mercado de las ideas y agentes políticos foráneos autoinvitados hacen de la paz el tema más abigarrado de la agenda política colombiana. Hay cientos de vertientes; tres son las más contundentes: la intervención tecnológica militar de Estados Unidos con apoyo de los países fronterizos (Perú, Ecuador y Panamá); la opción negociada pero con presencia y tutoría estadounidense y la autónoma, la nacional, que pugnan el presidente Pastrana y las FARC. El plazo que señalaron los asesores de Bill Clinton se aproxima y el fin de siglo amenaza con otra Navidad Roja, como en el caso de Guatemala y Nicaragua, pero cabe todavía la esperanza en nuestras mentes y, al lado de ella, la reflexión que intenta responder la interrogante: ¿Podrá Colombia sortear esta situación escabrosa? Esta investigación es parte de la respuesta que buscamos todos.

◆ Es Coordinador de la Red de Investigaciones Latinoamericanas por la Democracia y Autonomía de los Pueblos y Coordinador del doctorado interinstitucional CIDHEM/UAS en Ciencias Políticas y Sociales y en Enseñanza Superior

Robinson@infosel.net.mx

La paz en Colombia presenta serias dificultades para concretarse debido a que los actores involucrados se reconocen entre sí como interlocutores válidos para un diálogo amplio y constructivo, pero cada uno de ellos con

una apreciación distinta sobre el asunto de la paz, particularmente en lo que atañe al significado y la significancia que tiene ésta para el gobierno y su adversario, los insurgentes.

Asistir a una mesa de negociaciones implica saber qué significa la paz, para qué la estimo suficiente en la lógica de mi acción colectiva, qué voy hacer si arribamos a ella y de qué manera voy a asumirme como actor en un escenario distinto al conflictivo que se ha vivido en los últimos 50 años en Colombia.

La significancia es más distante entre los actores dispuestos al diálogo; la paz para el gobierno es un alto el fuego, construir un consenso legítimo y alcanzar la gobernabilidad que ha estado ausente en Colombia durante muchos años.

Para el caso de los insurgentes, la paz no es dejar de disparar ni atacar al adversario, sino solucionar de una



vez por todas las causas sociales, económicas y políticas que dieron origen al conflicto, y es aquí donde los intereses afloran, los grupos dominantes de las distintas regiones del país se parcializan, los militares se alinean con los sectores más conservadores y ligados al paramilitarismo rojasespinillista,<sup>1</sup> otros a los narcotraficantes y los más jóvenes, que anhelan la paz negociada, se apegan a la política del presidente en turno.

En otro escenario muy cercano a la mesa en construcción están los grupos que no son actores, pero se autoproclaman como tales, los paramilitares. El argumento que exponen para intervenir en la mesa de pacificación es que ellos surgieron en los años setenta como defensores del pueblo y enemigos de las guerrillas y hoy día están interesados en vigilar la entrega de armas de las guerrillas, porque mientras eso no suceda, los paras no se desmovilizarán; además exigen que se les tome en cuenta, porque de no ser así, seguirán combatiendo.

En medio del herbazal de las discusiones cotidianas se alcanza a objetivar que los verdaderos actores todavía, a estas alturas, no se ponen de acuerdo sobre si entra ya en funciones la Comisión de Verificación Internacional, ni se deciden a armar una agenda bilateral para el diálogo porque la desconfianza priva sobre la reciprocidad para un alto el fuego.

Un alto el fuego puede ser una decisión unilateral; casi siempre la toma quien ejerce o está en el poder constitucional, de ahí que el presidente Pastrana es el más indicado para dar el paso adelante; sin embargo, la presión de los altos mandos militares no lo permiten, dado que una decisión de esa naturaleza los dejaría en desventaja frente a la política

---

1 El paramilitarismo en Colombia es añejo; surgió con los grupos que aniquilaban a los infractores y a todo aquél que se oponía al régimen de Gustavo Rojas Pinilla, dictador que se asumió como conductor del país entre 1953-1957, y después dio paso al famoso Pacto del Frente Nacional entre liberales y conservadores que, si bien tuvo una duración de 16 años, éste se ha prolongado, con dificultades y tensiones, hasta hoy día.

---

de la FARC, cuyo vector es negociar peleando, a fin de arribar a la mesa de diálogo con la fortaleza militar y bajo una ambientación de adversario beligerante, pero con la suficiente capacidad de negociar, aun cuando la ofensiva la estuvieran marcando en el último episodio. Estos puntos favorables pueden inclinar la balanza a su favor cuando tengan que negociar sobre el destino de las armas y de los combatientes.

A todo esto agreguemos que las FARC han planteado reiteradamente que el cese el fuego no es un acto militar de abdicación; tampoco de voluntad política para pautar una negociación. Para el caso de Colombia, el cese el fuego tiene que ver con la negociación, fundamentalmente en lo que se relaciona a la matriz de donde emana la pobreza, la exclusión, el reparto agrario, la injusticia y el exterminio social.

Es este nudo el que no deja ver claro el inicio de un proceso de paz, pero si volvemos los ojos hacia atrás, podemos registrar en nuestras mentes lo que aconteció en El Salvador, Guatemala y, con sus particularidades, en Nicaragua, cuyas lecciones nos indican que no se negocia sin armas ni callando los fusiles, eso demostraría cansancio, hastío y desesperación de los insurgentes y la contraparte lo tomaría como un debilitamiento y ansiedad de negociar antes que perder.

Por ello, negociar con las armas en alto y con el fuego de por medio nos da a entender que la rivalidad sigue hasta que no se haya construido un consenso y éste debe ser por partes iguales. Apagar el fuego antes de cocinar la paz indica que la lucha concluye y alguien puede declararse vencedor; negociar luchando es sinónimo de destruir construyendo, porque hay vestigios de un régimen caduco que se esconde en enclaves culturales, económicos y políticos (Garretón, 1995) y tras ellos llama a deponer las armas para después alzar las suyas; es el caso de los sectores conservadores que lucran con la guerra en Colombia y desean desterrar a los insurgentes, con el fino propósito de apoderarse de todo el terreno político y dominar a sus anchas.



Entonces, la construcción del proceso de paz en Colombia es compleja y relacional, en la medida que tiene un sinnúmero de articulaciones con otros fenómenos sociales y políticos que la llaman a participar como un eje disipador de incertidumbre; también se entrelaza con diversos entornos particulares que se riñen entre sí y que se disputan un mismo espacio; sobrevive el proceso de pacificación sobre un subsuelo abigarrado de ingredientes conflictuales propio de cada realidad particular y del todo orgánico que constituye la sociedad en su conjunto. Se enmarca la pacificación en una región convulsionada y en transición, donde el ajedrez dominante de Estados Unidos tiene fichas que se mueven en sentido contrario a sus pretensiones injerencistas, desde la entrega del Canal de Panamá en diciembre de este año, hasta las acciones del enigmático Hugo Chávez; desde la crítica al intervencionismo estadounidense por parte de Fernando Henrique Cardoso, hasta la actitud aliancista de Ecuador y Perú para enlazar una participación directa del gobierno de Clinton en los asuntos internos de Colombia.

Con esta premisa de antemano, se nos presenta difícil de explicar el proceso de paz en el país sudamericano, toda vez que aceptemos tomar como punto de partida el cómo y por qué se originó el conflicto armado.

Es incuestionable el valor y el peso político que tiene la génesis del conflicto; asimismo, la singularidad de cada actor insumiso: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ejército Popular de Liberación (EPL) y los otros grupos que se inscribieron en el ayer y que, en el transcurso de la construcción del proceso de paz, se fueron aproximando mediante sus negociaciones, para dar cabida a lo que hoy vivimos: una paz en edificación.

Sobre la génesis de los grupos armados y del núcleo del conflicto hay cientos de miles de páginas escritas, algunas con una carga ortodoxa, otras muy esclarecedoras, pero todas tienen su mérito y, más aún, han aportado conocimientos va-

---

lios para descubrir un mundo desconocido en el transcurso de sus investigaciones.

Pero el proceso de paz es algo más que la génesis del mapa actoral que es parte del escenario conflictual; es una complejidad que, si bien tiene antecedentes, está constituida por actores insumisos o beligerantes que se desprendieron de la matriz intolerante y excluyente del régimen político colombiano; además, hay que tener en cuenta hoy día que el gobierno es el interlocutor que se sienta en la mesa para dialogar y construir consenso macro con los grupos alzados en armas; y adquiere vida propia al momento que todos los actores involucrados ponen sobre la mesa lo siguiente: *voluntad para el diálogo; reconocimiento del otro como adversario y no como enemigo a eliminar* (Serrano, 1998); *una actitud mental que los posicione, a cada uno, como interlocutor y no como ganador ni perdedor* (Howard, 1995); la disposición de apartar, en un comienzo, la carga de significancias que cada grupo ha estructurado en su imaginario, no para marginarlas de las negociaciones, pero sí para que no sean alineadas al principio de una negociación (Salazar, 1998) y un respeto recíproco entre las partes a negociar.

¿Qué debemos tener en cuenta?

Por un lado, reconocer que el tema de la paz es político, si vemos la política como la transformación del conflicto en un consenso amplio e incluyente de los actores enfrentados; que la orientación pacificadora se sustenta en la empatía con las preocupaciones de todas las partes por recomponer una realidad social que es de todos y que hasta ahora no había sido construida teóricamente.

Otra arista del fenómeno es que la paz, como proceso constituyente, es permanente e inacabada, no se concluye con la firma de los acuerdos, sino que se transforma en una fuente inagotable de consensos que pueda permear todos los rinco-



nes del país colombiano, en la medida que rompa los diques que impiden la comunicación e interacción entre los distintos actores que viven y recrean una realidad y, al ser instaurada la paz, abra las compuertas de acceso a la construcción de la pluralidad, la multiculturalidad y la democracia ampliada.

No es nada nuevo reconocer que la paz tiene como punto de partida a la hostilidad y a la negación de derechos, donde la figura de amigo-enemigo es el eje fundamental, y la confrontación entre los actores es la enemistad pública, misma que está respaldada por unos intereses, convicciones, valores y posesiones.

Pero es innegable que la guerra y la política están separadas por un delgado himen, poco perceptible, aunque la una encierra a la otra. La guerra es entendida como el límite de la polarización cuando los canales de comunicación entre los sujetos en conflicto se cierran, provocando una particular acción colectiva.

La acción colectiva, como acto de guerra, es aquélla por la que una conciencia colectiva enfrenta una situación (estructura de dominación, violación de derechos ciudadanos, etc.) y la cambia, creando situaciones inéditas.

Vemos entonces que una acción no se centra en contra de una persona o grupo específico, sino de un orden social impuesto; es la revelación de un segmento social en contra de un eje de dominación y de exclusión, por ello cuestiona las raíces de la imposición de unas reglas del juego y del juego mismo.

Aquí hay algo novedoso, la guerra que manejan los insurgentes colombianos no es de exterminio absoluto del otro, pues la hostilidad no está dirigida al sujeto contrario, aunque él la personifique; sino al orden de cosas que el sujeto defensivo representa. Entonces el conflicto es el motor de la acción colectiva rebelde, misma que lleva sobre sí, valores, intereses y simbología de la ideología insumisa

Este espectro relacional hace que los investigadores armen el rompecabezas de las pretensiones de los actores en

---

conflictos y que estén esperanzados, todos, en arribar a una paz sin que sus intereses sean vulnerados, aunque vale la pena resaltar que los intereses son multidiversos; unos tienen referencia directa con la democracia, otros con la tenencia de la tierra, algunos más sobre la identidad étnica, sin menoscabar a los que se inscriben en el marco de género, organización, libertad de credo y aspectos autonómicos. Ante ello, los acuerdos de paz tendrán que pasar por la galería del jardín floreciente del consenso.

Re-situar a los actores en una mesa constructora de consenso no quiere decir que los conflictos se apagan, que el diálogo es sensato y que todo pasa por la deliberación. Consenso es algo más que un arribo, es un punto de partida donde las partes van a construir la escalera de ascenso al entendimiento, sin renunciar a sus ideales ni a sus demandas, sino para reconstruir un camino que dé acceso a todo lo que aspiran, pero sin lesionar ni excluir al otro. Quizá algunas de las demandas se aplacen, otras se guardan en el almacén de los ideales, pero no se borran, porque tendrá, tarde o temprano, que aparecer una coyuntura favorable para intentar cristalizarla.

#### *Retos internos de los actores conflictuados*

- Romper el eje ortodoxo de la concepción de guerra en los actores armados.
- Leer con lentes prismáticos la realidad, a fin de separarla sin descomponerla; rearticularla y armonizarla bajo otros ideales.
- Abandonar, poco a poco pero en un plazo perentorio, la pertenencia doctrinaria.
- Armar un domo de valores flexibles e incluyentes para aproximarse a las convergencias.
- Trazar los caminos para adaptar a los insurgentes a una vida ciudadana, plural, tolerante y plétórica de diálogos y acuerdos.
- Aprender a convivir, compartir y caminar con otros actores, aunque con ellos no se tengan muchos elementos identitarios, pero donde hallen traslapes o puntos comunes, armar un lazo convergente.



*Qué ofrece la realidad colombiana*

- Una heterogeneidad social.
- Un achatamiento del estado Nación y por consiguiente una liberación de nuevos actores emergentes.
- Una multiorganidad de la sociedad civil.
- Nuevos actores: étnicos, de género, derechos humanos, ambulantes, jubilados, ONG's y homosexuales, entre otros.

*Una restricción forzada del ejército*

- Un desdibujamiento de la polarización este-oeste.
- Crisis de los partidos políticos.
- Un horizonte difuminado en la izquierda doctrinaria.
- Un desgaste social por la guerra.

*A qué aspiran los Insurgentes*

- A resituarse como actores políticos en el nuevo escenario.
- A refundar algunas instituciones y otras a reinstitucionalizarse.
- A construir un nuevo Estado más incluyente a los reclamos de las nacionalidades sin Estado.
- A llenar de contenido, con el acuerdo de paz, a los distintos actores políticos y sociales, susceptibles de armar futuros arcos convergentes con ellos.
- A ser gobierno desde la sociedad civil.
- A obligar a los actores en el poder a compartir y flexibilizar la cosa pública a través de elecciones limpias y con credibilidad.
- A recuadrificar el mapa actoral en cada país.

*Elementos que requiere un acuerdo de paz*

- Que las partes bajen los niveles de desconfianza recíproca.
  - Evitar la intención de vulnerar la identidad del otro.
  - Aceptar la dimensión y naturaleza nacional del conflicto.
  - Aceptar que el marco jurídico vigente no puede disolver el conflicto, por ello se requiere de una constituyente que recoja lo mejor de la editada en 1991 y haga las innovaciones que se requieran.
-



- Vencer los rechazos y temores que se tienen a los anteriores procesos de paz que no fructificaron.
- Redefinir la percepción de verse a sí mismo negociando y en relación con el otro.
- Analizar las significancias que tienen los bienes que se negocian; algunas veces no tienen un valor exagerado, pero tras de ellos está la percepción sico-social de ganar o perder; si una de las partes pretende detener o deteriorar la significancia de uno de ellos, estamos seguros que no hay negociación.
- La intervención de un garante que equilibre las dos voluntades por llegar a un acuerdo.
- La voluntad política debe hacer referencia al modo en que las partes acuerdan o negocian alterar la relación de sub o superorden, a fin de reconstruir la capacidad de gobernar y obedecer en la sociedad.
- Un diálogo permanente, consultivo, deliberativo y resolutivo por cada una de las partes conflictuadas.

### ¿Qué se puede lograr?

Con la paz se arriba a lo siguiente:

1. La transición de la sociedad: que aumente el capital social que representa la sociabilización a fin de que la fragmentación que se vive se vaya diluyendo, poco a poco, hasta alcanzar una etapa de molecularización, cuya característica sea los enlaces asociativos entre los distintos grupos y actores sociales a través de traslapes identitarios y no por identidad en los principios doctrinarios, arrojando un sujeto multidimensional.

2. Que la nueva socialidad tenga en su haber los siguientes elementos constituyentes:

- El aumento de la capacidad social de reflexión: producto de la globalidad excluyente y la identidad de la pobreza.
- Encuentro y reencuentro de los distintos actores en los traslapes identitarios desde lo local, sin supeditarse a los ejes doctrinarios, sino ante las demandas sentidas y



la exclusión, la identidad de la pobreza y la exclusión neoliberal.

3. Construcción del nuevo reequilibrio social, cuya plataforma es el imaginario social en proceso de construcción, donde la complementariedad permita armonizar la comunidad entre los valores masculinos y femeninos (económicos y humanos).

4. La mutación de la izquierda, alejada de la rigidez doctrinaria y cercana al tercer incluyente, superando a la derecha y a la izquierda ortodoxa, es algo substancialmente mejorado, convergente, con rostro humano.

5. Un nuevo sujeto político de domo convergente: el insu-miso, que no busca el poder para ejercerlo, sino para democratizarlo, diseminarlo sobre la sociedad civil y cargar de contenido político a todos los actores sociales y políticos para que la política ocupe su papel en la sociedad.

6. Que el paralelismo libero-conservador acepte la multi-organización de la sociedad y de paso a los otros partidos de carácter nacional y regional que buscan reposicionarse en la política colombiana.

¿Quiénes entorpecen  
el proceso de paz?

No podemos, por responsabilidad social, señalar un solo actor como el culpable de que las pláticas sobre la paz sean intermitentes, pues sería muy riesgoso, ya que se descargaría sobre sus espaldas todo el fardo de las irregularidades de la guerra y el costo político-social de la confrontación.

Existen errores de las partes involucradas en el conflicto; los insurgentes han sufrido la presión del tiempo, ya que no tenían noción de la velocidad que tomaría el curso de las negociaciones, ni de la cantidad de ojos que velarían por el diálogo; los espacios de reflexión se acotaron significativamente y la comunicación que prevalecía entre la dirigencia insur-

gente y sus ramificaciones celulares no fue tan expedita como se desearía. Y justo ahí, por esos tabicamientos que surgen en el transcurso de los acontecimientos, los errores sobresalen y ponen candados parciales a la fuerza y a la voluntad de las partes para arribar al primer acuerdo de paz.

El gobierno también tiene su responsabilidad en la lentitud del diálogo, debido a que el presidente discursivamente combate y señala a los paramilitares como agentes del desorden, pero en la práctica permite y tolera que sectores de la sociedad, enquistados en el poder, apoyen a los «paranarcómilitares»; incluso limitan e intentan desconocer las acciones del gobierno, tal es el caso de los altos mandos militares, quienes muestran públicamente su tensión con Víctor G. Ricardo, alto comisionado del gobierno para el diálogo, denunciándolo como un representante gubernamental proclive a los guerrilleros e interesado en excluir a los militares del proceso.

Los errores tienen su precio, algunos incalculables, pues su magnitud se verá reflejada en la letra de los acuerdos, pero el secuestro de los misioneros indigenistas estadounidenses, realizado por las FARC; el atentado del oleoducto en Machuca, ejecutado por el ELN, con un costo de 80 muertos para la sociedad civil; el secuestro de la aeronave de Avianca y de los feligreses en la Iglesia La María, Cali, han allanado el camino para que sectores retardatarios en Colombia censuren, señalen y griten, con desesperación, que no hay posibilidad ni capacidad del gobierno para controlar a los insurgentes, que el diálogo es inoperante y el argumento del mismo una falacia, dado que los guerrilleros, con sus actitudes y comportamiento, buscan fortalecerse políticamente.

Quien capitaliza los errores de las partes involucradas en el diálogo son los paramilitares, cuya razón de ser ha arrojado miles de hojas escritas sobre la sociogénesis de este grupo que condiciona un diálogo entre gobierno e insurgentes en función de ser el tercero en discordia: ellos.



Aceptar a los paramilitares como actores con capacidad decisional en el conflicto es inverosímil, pues su estructuración, la lógica de comportamiento y su identidad están ligadas a una probeta de narcotraficantes y a un sector de ganaderos que desean y aspiran a una cuadrícula dentro del tablero del ajedrez político colombiano.

No son actores capaces de construir una acción colectiva genuina, tampoco tienen en su comportamiento intereses propios como grupo, sino intereses ajenos que los asumen como de ellos, pero tras la cortina de su accionar están narcotraficantes y grupos ligados a la economía negra y al tráfico de armas; parte de sus finanzas devienen de las extorsiones y secuestros; su asentamiento está en regiones donde la compra de votos es significativa; el temor es parte de la ambientación social, la coacción es una forma de control social y el engaño es el imaginario de la sociedad que ampara a los paramilitares. Están enclavados en zonas estratégicas en producción minera como oro y esmeraldas y financiados por grupos económicos ligados a la ganadería, cultivo de arroz, palma y algodón.

Su acción colectiva no puede, desde el conocimiento, ser explicada por lo que hacen, ni por lo que dicen, sino por la lógica que predomina y el interés escondido tras ella; no existe en su discurso un hábito de esperanza para incentivar intereses no materiales, tales como la solidaridad, el altruismo, una identidad colectiva que haga del grupo un sujeto generativo y portador de un modelo nuevo de sociedad.

Lo que dicen y lo que hacen los ubica en un espacio donde residen los no-sujetos, los que no crean ni recrean lo social, pero destruyen todo argumento y creación colectiva que los desplaza o los niega. No hay en su discurso una alternativa que dibuje una situación diagnóstica relacional donde se vean ellos y los demás reconstruyendo a Colombia; mucho menos se les observa una capacidad para armar o articular imaginarios futuros. Son y seguirán siendo un actor probeta sin identidad.

---

Ante el desenmascaramiento que han sufrido, los paramilitares han buscado una inédita forma de comprar, en el mercado de lo insólito, un imaginario social, cuyas demandas, intereses y campos futuros nos dicen que no son ellos; parece una colcha de retazos sin lógica ni razón, pues articulan lo inarticulado; arman un conjunto con elementos disímiles; cantan una canción, en diferentes ritmos y distintos idiomas, y a eso le llaman «propuestas de los paras».

Es claro, para los analistas e investigadores del caso colombiano, que la lógica del mercado prevalece y le imprime un sello a cada acción que la sociedad pretende desarrollar. No es ajeno para los escritores detectar las intenciones de un grupo social por anclarse en la sociedad como partido político, como ONG o como comité cívico; no obstante, también es parte de un recurso investigativo conocer cuándo una creación colectiva se desprende de ciertos diagnósticos y prescripciones para la acción que han de conducir a la realización de ciertos pronósticos.

Crear una alternativa como la que pretenden los paras implica que los actores colectivos deseen construir esos futuros y se justifiquen a sí mismos el tiempo, el esfuerzo y los riesgos de emprender acciones tendientes a cambiar la situación actual y de llegar a un orden nuevo que puede diferir del futuro imaginado o, incluso, tener consecuencias negativas. Las expectativas de llegar a ese futuro imaginado y deseado deben ser lo suficientemente significativas como para justificar y hacer llevadera la incertidumbre que conlleva el cambio social y contrarrestar las respuestas de los actores que se vean afectados (Cadena Roa, Jorge, 1999).

Este esquema analítico no calza con lo que hacen y proponen los paras; veamos por qué.

Las autodefensas surgen en los años ochenta como una reacción al avance que la guerrilla mostraba en algunos escaques del territorio nacional; su organización no partió de una demanda social, tampoco gozó de una tradición que teji-



ra su accionar con hilos de identidad, historicidad, exclusión y símbolos, articulado de una sociedad que sufría el despojo o la represión para que no creciera.

Fue y sigue siendo un grupo armado por intereses de narco-trafficantes que vivían bajo la complicidad del gobierno y los militares, en la mejor época en que los barones de la droga infiltraban las esferas del Estado. No pasó por el zaguán de la estructuración social de un sujeto, no le importó sensibilizar a la sociedad sobre su proyecto, dado que son insensibles a los demás, no respondían a un interés colectivo y su razón de existencia era manipulada por un grupo ajeno al interés nacional.

Ante una situación desventajosa, los paramilitares decidieron aproximarse a la galería de los artículos suntuosos, cargados de dinero y con exagerada necesidad por obtener una identidad y, en el tianguis de las ideas sin actores, contrataron a 20 diseñadores de ideas, cuya matriz es multidiversa, pues algunos devienen de la izquierda de los setenta, otros ex gobernantes, dirigentes sindicales, empresarios y ex magistrados. Un puñado de hombres sin una identidad entre ellos, sin conocerse entre sí, desconectados de una demanda que sirviera de cemento social, con intereses dispersos y sin peso social.

Cada uno, independientemente, elaboró un trozo del cuerpo de la plataforma de los paras, cuya finalidad, en una primera instancia, es la de convencer al gobierno y a las demás esferas de la sociedad civil de que las AUC (*Autodefensas Unidas de Colombia*) no son una organización criminal y de que sus orígenes tienen raíces políticas; en otro renglón, su intención es no quedar al margen del diálogo, sino involucrarse en el proceso de paz como actores, a fin de fracturar los acuerdos entre gobierno e insurgentes y sacar provecho en el reordenamiento político que se construya en la pospaz.

Otro argumento de peso es la constitución de los «paras» como sujetos, debido a que la plataforma que dieron a conocer no los faculta para que se le reconozca como tal. Un sujeto

---

no es una construcción simbólica ni un programa de gobierno. Para arribar al sitio de sujeto es necesario que se constituya en un proceso de intercambio complejo, donde existen aspectos sociales de afecto, de lenguaje, de comportamiento y de autorganización. Un sujeto no se caracteriza por su subjetividad, sino por ser al mismo tiempo capaz de objetivar, es decir, de convenir, de acordar en el seno de la comunidad, de producir un imaginario común y, por tanto, de construir su realidad (Najmanovich, Denise, 1995).

La construcción de la realidad pasa por la acción colectiva que realizan los actores sociales y, tras de cada acción, hay una racionalidad que le da sentido al comportamiento de los hombres y mujeres que son parte del cuerpo actoral. Una acción no es un comportamiento colectivo espontáneo, sino que atrás de ella existen medios que le dan soporte, entre los cuales se encuentran el capital social del movimiento, cuyos ingredientes son la formación y experiencia educativa, la capacidad de aprendizaje, la capacidad política, técnica y de gestión, la virtud generativa para construir negociaciones, consensos al interior y con otros actores.

Otro elemento que hace parte del soporte de la acción son los recursos comunicativos, conocidos como las pericias, habilidades y destrezas para acceder a los medios, vincularse con la sociedad a través de comunicados, consignas, alegatos, discursos, prensa, radio y televisión, sin olvidar la nueva plataforma que ofrece el Internet.

El recurso organizativo es muy importante, dado que es el laboratorio social del actor, pues mediante él los hombres y mujeres hacen una lectura de su realidad, prescriben la ruta de su comportamiento; también fortalecen su tejido interno a través de la socialización de ideas, asignación de responsabilidades, formación de cuadros y distribución de tareas.

Existe otro recurso simbólico cultural que hace parte del almacén de sus ideas, de la creatividad para representar a la realidad y divulgar sus rasgos agresivos contra el actor so-



cial. La lucha simbólica hoy día es muy significativa y es una de las armas más efectivas para penetrar en amplios segmentos de la sociedad.

El repertorio de contención es aquella capacidad para multidimensionar el comportamiento del actor social, en la medida que permite que la demanda central y las coadyuvantes se planteen en paros, huelgas, tomas de calles, plantones, mítines, marchas, desplazamientos masivos, recriminaciones, denuncias, panfletos y las demás expresiones que día tras días innova la sociedad civil.

Estos recursos no son nada nuevo, muchos especialistas en los estudios de los movimientos sociales los dan a conocer y sobre la base de ellos construyen las interpretaciones de cada actor en escena; basta con asomarnos a la extensa bibliografía que hay sobre el tema para abreviar en los recursos mencionados.<sup>2</sup>

La interrogante para los analistas es: ¿Son actores los paros? ¿Cumplen con estos requisitos? ¿Han construido estas mediaciones que le den soporte a su acción colectiva?

Si no hay respuestas, entonces nos preguntamos, ¿sobre la base de qué se propone estructurar a la Asamblea y el Congreso nacional? ¿Será acaso mutilando las posibilidades de una pluralidad? ¿por qué eliminar la defensoría del pueblo, si ella es un recurso que la sociedad civil construyó e instauró a partir de las distintas demandas y que es reconocida a otros ámbitos de Latinoamérica? ¿Por qué quieren revertir la tendencia descentradora y descentralizadora en Colombia, si es el eco de los reclamos locales no sólo en este país, sino en toda América Latina? ¿Qué pretenden con encapsular en un consejo departamental sesionando una vez por año, como si la voluntad del pueblo que se manifies-

---

<sup>2</sup> Los autores que ofrecen este tipo de análisis son, entre otros, Roberto Fernández, Doug McAdam, Mayer Zald, Neil Smelser, Charles Tily, Mancur Olson, Alberto Melucci, John Mc Carthy, Francois Dubet.

---



ta en las elecciones fuese un cheque en blanco o una autorización para que diseñen y decidan la vida de un pueblo o comunidad?

Son éstos algunos de los tópicos que dan a conocer los parás, pero no es todo, porque en su desesperación por tener una identidad y aparecer distanciados de quien los procreó, el sector militar de la vieja oficialidad ligada a la «Mano Negra», son capaces de, en un mañana cercano, comprar otro imaginario más conservador y contratendencial a lo que reclama la sociedad civil colombiana.

#### La intervención frontal de Estados Unidos

---

Los tres procesos de paz en Centroamérica tuvieron apoyo y mediación de la Comunidad Europea, países como Noruega, Alemania, Suecia y Francia; no obstante, su participación marginó a Estados Unidos de un manipuleo en la construcción de la paz, puesto que ellos, los estadounidenses, tenían intereses políticos y enclaves militares en la zona que posibilitaban una paz sin cese el fuego.

Para el caso de Colombia, la participación del gobierno estadounidense es muy cuestionada no sólo por la actitud y tradición política de los insurgentes, sino por lo que ha representado el coloso del norte para el todo colombiano. Desde hace muchos años, más de 50, el país sudamericano ha tenido en su seno empresas petroleras que han saqueado las riquezas de los bolivarianos, inversiones en la zona bananera que desataron luchas que agobiaron al pueblo, en bancos y empresas de diversos rubros que han marcado la historia política de este país. Si a todo ello le agregamos el enigma del narcotráfico, Colombia siempre se ha visto vulnerada por las incursiones de Estados Unidos.

En los últimos tres cuatrienios, los distintos gobiernos que ha tenido Colombia se han visto en la incomodidad de



gobernar para dentro y para fuera; esto es, que buscan crear, al interior del país, una gobernabilidad en el aire debido a que la cuadrícula del entorno social es multidiversa; con intereses económicos y políticos encontrados, todos o casi todos tienen que ver con la guerra, ya sea porque la apoyan con dinero y relaciones de gobierno (un sector de los ganaderos del Magdalena medio y las sabanas de Córdoba, Sucre y Bolívar), también con respaldo militar y apoyo logístico (militares que han construido alianzas con los paramilitares) y políticos de oficio que arriban a una curul, gobernador o alcalde, por los montos exagerados de dinero que les surten los carteles de la droga.

La opinión pública, los medios de comunicación masiva, la subjetividad colectiva que se da en la ambientación cotidiana son parte del narcotráfico, por lo que afirmamos que este problema de la droga ha venido permeando a Colombia de una manera inusitada, puesto que las esferas del poder, el gobierno, la autoridad, la sociedad civil, las empresas, los medios de comunicación, la vida cotidiana está embriagada por el narcotráfico.

Ante un espectro congestionado para el diálogo, dividido por intereses de todo tamaño en la escala del dinero, lacerado por las muertes en las familias ligadas directa o indirectamente en el negocio de las drogas; muertes que no tenían nada que ver, casos de contingencia humana, con una violencia que ha rebasado los límites de la tolerancia, la gobernabilidad no es posible.

Frente a esa dificultad de gobernar hacia dentro, hay una presión permanente de gobernar hacia afuera, cuyo eje principal es estar bien con el gobierno de Estados Unidos; de lo contrario hay represión que se manifiesta en la descertificación en el asunto de las drogas, retiro de apoyos y créditos, alud de críticas para ahuyentar inversiones y hostigamiento ideológico para que Colombia no sea visitada ni atendida por agentes externos.

---

La situación incómoda del país bolivariano ha repercutido en la subjetividad colectiva de los colombianos, la desesperación que cunde cuando llega el periodo de la certificación es inexplicable, empresarios, comerciantes, empleados, estudiantes y profesionistas opinan y dividen opiniones, tanto que hay conflictos intrafamiliares e intergrupales que multiplican el abigarramiento conflictual en ese país.

Son ésas las razones por las que en Colombia no hay un aprecio en la mediación de Estados Unidos, como país, en las negociaciones de la paz; además, si Colombia está atravesado por las coordenadas de la droga, Estados Unidos nunca ha permanecido distante (Arrieta, C., Orjuela, L., 1993); sostiene una punta de las coordenadas y atraviesa a través de ella a Colombia comprando y consumiendo cientos de toneladas de cocaína.

La identidad de  
quienes asesoran

La voluntad que el gobierno estadounidense dice tener para coadyuvar en el diálogo por la paz en Colombia es retórica que atenta contra la pacificación, ya que todos los involucrados, en el plano dirigencial, son personas que desempeñaron un papel preponderante en la guerra de El Salvador. Desde Thomas Pickering hasta el general Charles Wilhelm son conocidos como los «*Salvador Boys*».

¿Cómo está ese cuadro de identidades antisubversivas?

Veámoslo. El actual subsecretario de Estado de Estados Unidos fue embajador en El Salvador en los ochenta; en esa ocasión reemplazó a Bob White, quien ahora desempeña un cargo de director de una ONG que hace trabajos en Colombia; Peter Romero, quien fue embajador en Ecuador, hoy día trabaja con Phillip Chicola, que en el ambiente de loby ya se les considera, a los dos, como los estrategas de la política de paz en Colombia. Chicola fue consejero político de la embajada



en El Salvador durante la guerra, cuando Wilhelm, hoy jefe del Comando Sur, fue el agregado militar de la embajada en El Salvador

Con un cuadro asesor de esta magnitud y tan selectivo, podríamos pensar, ¿está cerca la paz en Colombia?... la respuesta es un no rotundo, ya que los expertos y analistas de la génesis y desarrollo de la paz en Centroamérica saben muy bien que ella no se originó por la voluntad mostrada del gobierno y sus asesores estadounidenses. La paz devino por la necesidad social que objetivó el FMNL y el reconocimiento mutuo de los involucrados de que no era posible una victoria por la vía militar.

La supuesta manzana de la discordia:  
La Comisión de Verificación

La parálisis de las negociaciones, que comenzaron viento en popa con el arribo de Andrés Pastrana Arango a la presidencia, se debe al empantanamiento de un acuerdo en que dicen cada una de las partes tener la razón frente al procedimiento que viene.

Por parte del gobierno, la Comisión de Verificación Internacional (CVI) es una condición necesaria para negociar. La función de este grupo será la de controlar a las partes en conflicto para que no se excedan en sus atribuciones ni en su comportamiento político-militar; asimismo, se encargarán de regular el comportamiento de los insurgentes en la zona de despeje; dicho en otras palabras, el gobierno pretende negociar controlando, eliminando de entrada la movilidad y desplazamiento de los insurgentes en San Vicente del Caguán; sin embargo, el territorio que se despejó está delimitado y focalizado; pero la movilidad del ejército nacional es amplia, sin restricciones y con apoyo logístico-informativo de Estados Unidos a través de los aviones P3 y las señales que le envían desde las zonas de operaciones de Manta en

---

Ecuador y la base militar del Canal de Panamá (Martínez Cunill, 1999).

Por parte de las FARC, Manuel Marulanda afirma que nunca hubo un acuerdo explícito con el gobierno sobre el tema de la CVI; sí se tocó el tema, porque en todo proceso de paz debe haber una CVI, pero su conformación y operatividad no se discutió. Sólo se mencionó (Marulanda, M., 1999. A.). Y plantea, en el mismo tenor, si hay acuerdo para negociar, avancemos y hagamos una consulta pública sobre la ley de canje; eso nos ayudaría a destrabar el inicio del diálogo y liberaríamos a policías y soldados secuestrados, a cambio de los insurgentes detenidos (Marulanda, M. 1999. B.).

Otro *impasse* que tiene la CVI es que los alcaldes en Colombia son elegidos democráticamente y en las zonas conflictivas su mandato está vigente, por lo cual ellos pueden y están pidiendo recibir las quejas de la sociedad civil y aun de las partes en discordia, sin tener que acudir a una instancia ajena a lo que acontece en Colombia; ahora bien, qué se puede verificar cuando aún no se ha iniciado la negociación. Si apenas hay 12 puntos de acuerdos, ellos son la mesa sobre la cual deben ponerse a discutir las pretensiones de cada actor y no cuidarse mutuamente antes de saber qué quieren y hacia dónde marca la brújula de la pacificación.

Antes que una CVI debe instalarse una Comisión de Intermediación, cuya función sea la de buscar acercamiento, encontrar un lenguaje común entre los actores en conflicto, descubrir en las agendas de trabajo y demandas puntos de articulación e incluso de traslape para edificar objetivos comunes. Si ésta es una salida apropiada y utilizada en anteriores procesos de paz, por qué no razonar sobre esa posibilidad en Colombia.

Hay dos nubes que se asoman en este escenario de canje y CVI. En el canje de secuestrados y presos, en la lista que tienen cada una de las partes puede faltar uno, dos o más, ya sea porque lo mataron o murió en combate, pero al no apare-



cer se recruce la relación confrontativa, más si es un personaje vital para las partes.

La otra nube en el ambiente es cómo se va a conformar y a operar la CVI. Si va a tener una injerencia de países como Argentina, Ecuador, Perú, Estados Unidos o Panamá, es seguro que la CVI nazca discapacitada, porque los gobiernos mencionados se han manifestado abiertamente en contra de una negociación con las FARC. Si entran otros países como Brasil, Alemania, Francia e Inglaterra, Estados Unidos lo censuraría, porque los europeos han restado posibilidad injerencista a los estadounidenses en otros escenarios, de conflicto.

Aquí cabe la razón de Marulanda, al afirmar que primero discutamos el quehacer de la CVI en las zonas despejadas, cuál va a ser su contribución a la paz y que por ningún momento se asuma como instancia de presión para solucionar el conflicto. Las negociaciones son entre FARC-Gobierno, dos actores identificados y con un documento de demandas cada una de las partes; sin embargo, la negociación va encaminada a construir un solo documento que deje satisfechas a las partes. Ningún país, por muy poderoso que sea, tendrá que ver en esta confección de la paz.

La CVI ahora no tiene nada que vigilar, afirma Marulanda, porque hasta el momento no hemos iniciado el diálogo, solamente hay 12 puntos de confluencia. Cuando la negociación arranque y se den los primeros resultados dignos de valorar como positivos, entonces que entre la CVI, con la salvedad que puede actuar en 42 mil kilómetros cuadrados para vigilar lo que se vaya construyendo.

El cerco del actor que se autoinvitó

Si fijamos los ojos en la compleja, peligrosa y cambiante situación de Colombia, así la define Barry McCaffrey, las negociaciones dependen de un acuerdo entre gobierno

---

y las FARC, pero el obstáculo más elevado es el gobierno estadounidense.

Las incursiones que ha realizado Estados Unidos desde el mes de mayo hasta la fecha son inauditas. El cerco sobre Colombia avanza en el terreno político y militar. Enumeremos las que hemos logrado captar.

En Panamá, bajo la presión de entregar la base militar y custodia del Canal el día 31 de diciembre de 1999, ha divulgado, en concordancia con los sectores neoconservadores del istmo, la escalada de los insurgentes colombianos por el sector del Darién, poniendo en riesgo la estabilidad del país. Esta noticia hecha temor ha provocado opiniones encontradas en Panamá y hasta se argumenta, por parte de Mireya Moscoso, presidenta en funciones, que se arrendará la pista aérea Howard del aeropuerto Tocumen al gobierno estadounidense, cuyas dimensiones son de 2,600 Mts., con rampas y carreteos, apta para recibir aviones Awac, B3 y F16. Y se construirá una base militar en las regiones donde habitan los pueblos indígenas de Payas y Punuza (Gandásegüi, M., 1999).

En la república de Ecuador, sur de Colombia, la base aérea de Manta opera con seis naves P3 de cuatro turbinas y doce asesores militares estadounidenses –palabras de McCaffrey–, y el gobierno de Estados Unidos ha entregado 35 millones de dólares para su trabajo cotidiano. La colaboración de Ecuador se da con 5 mil soldados destacados en la frontera con Colombia, apoyados con la información que se capta en la base Manta.

La labor que desempeña una base estratégica y los aviones que en ella aterrizan es captar a través de imágenes satelitales la información proveniente de interceptaciones telefónicas, desplazamientos de los guerrilleros, centros de acopio y operativos de los insurgentes, para socializarlos con el ejército de Colombia, Ecuador y Perú y así medrar la capacidad de los guerrilleros. Pero lo más importante de destacar



es que los militares colombianos, bajo el convenio de colaboración que establecieron con Estados Unidos, la información obtenida la proporcionan a los grupos paramilitares a fin de que preparen emboscadas, ataquen pueblos colaboracionistas de los insurgentes y tengan precisión en sus desplazamientos; es por ello que, en los últimos dos meses, la ola de asesinatos y ataques contra poblados se ha incrementado, lo cual es posible por la cantidad de información certera con que cuentan los paramilitares y que obtienen a través de los centros de inteligencia militar de Colombia.

En una reseña que hacía Ana Barón, corresponsal del periódico *La Nación de Argentina* en Washington, explicaba que en la administración Clinton hay dos discursos con respecto a Colombia; uno que presiona y crea las condiciones para la intervención quirúrgica, mismo que pregonan el Gral. Barry McCaffrey y el General Charles E. Wilhelm, Jefe del Comando Sur, justificado bajo la vieja y nunca demostrada teoría de la seguridad nacional, cuyo argumento empírico es que Colombia tiene 37 millones de habitantes, que está a tres horas de vuelo de Miami y que es un aliado importante desde el punto de vista político y económico.

La otra opción o discurso moderado la encabeza Arturo Valenzuela, encargado de los Asuntos Interamericanos en el Consejo Nacional de Seguridad, quien está obstinado en una salida política negociada.

Entre esas dos posturas, la belicosa y la negociadora, aparece un discurso revelador de Bill Perry, republicano especialista en América Latina, quien colabora para el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos de Washington, afirmando categóricamente que la intervención se mide en la escala de 1 a 10, y para el caso colombiano ya estamos en el nivel 2. Esto quiere decir que, en este rango, las partes involucradas, los intervencionistas y los colaboradores comparten material de inteligencia, imágenes satelitales, interceptaciones de comunicaciones, vuelos de reconocimientos, entre otros

---



apoyos logísticos. Para el republicano Perry, la intervención en Colombia no va ser masiva, hay que borrar la imagen que reposa en nuestra memoria colectiva de lo que fue República Dominicana de 1965, también lo que aconteció en Granada en 1983, o en Panamá en la época del general Noriega. Lo de Colombia a finales de siglo va a ser, si se lo permiten, una intervención gradual; de un nivel 2 pasaran al 3 y así sucesivamente, hasta que trasladen asesores militares, asesores de combate, material de guerra y finalmente maniaten lo mejor posible a los insurgentes para no dejarlos reposicionados como actores políticos en la vida pública de Colombia.

La avanzada es significativa, la *Drug Enforcement Agency* (DEA) colabora estrechamente con los belicosos del Pentágono; la muestra son los 65 agentes que trabajan en Colombia, principalmente en Bogotá y Barranquilla, que sumados a otros funcionarios que se encuentran diseminados a lo ancho y largo del país suman 240, quienes se encargan de monitorear y enlazar comunicación sobre lo que acontece en el país sudamericano; además, el 14 de septiembre de 1999 se inauguró la base militar Tolemada, en el Departamento de Tolima, que funciona como un centro de operaciones equipado con mil soldados calificados y entrenados por agentes estadounidenses en manejo de explosivos, demoliciones, tiro con ametralladora, fusil y armas cortas; operaciones de comando y fuerzas especiales, lucha contraguerrilla y ubicación estratégica en zonas selváticas; ellos cuentan con 18 helicópteros VH-1N que vuelan a una velocidad de 45 Kms./Hr. a una altura de hasta 10 mil pies, dotados de doble turbina y con capacidad para 15 hombres armados y equipados. El propósito público es combatir el narcotráfico; la razón no revelada es que se va a establecer el centro de operaciones cerca de la zona de influencia de los insurgentes; el objetivo es obvio: combatir a los guerrilleros bajo el manto de la lucha antinarcóticos.

La otra frontera, Perú, la mancuerna Fujimori-Montesinos, presidente y asesor presidencial de seguridad nacional,



han reiterado su crítica a Andrés Pastrana por su debilidad ante la guerrilla, ya que, según ellos, con una fuerza beligerante no se negocia, se le extermina y para ello remiten a su lección que tuvieron con Sendero Luminoso.

Con esta pareja hay un *handicap* en su contra y es que el General Barry ha señalado su reserva para con Montesinos, de quien se dice tiene nexos con el narcotráfico; por eso la alianza no se ha profundizado en esta línea fronteriza, aunque hay que aclarar que existe una movilización de 2,000 soldados en los puntos fronterizos con Colombia

Venezuela rompe el anillo  
y Estados Unidos cierra pinzas

Este país es noticia por muchas y distintas razones; no nos detengamos a destacar todas, ubiquémonos en el caso que nos interesa: el asunto de la paz en Colombia.

Hugo Chávez, quien se ha proclamado bolivariano y continuador de la gesta del libertador, ha dado muestra de respaldo a las FARC para el diálogo, le apuesta y ha realizado algunas gestiones para que se cristalice; sin embargo, su apoyo está limitado a los asuntos fronterizos donde se mueven los insurgentes y los militares colombianos, sin que tenga que opinar ni intervenir en el proceso interno de la pacificación.

Aunado a esto, Hugo Chávez en meses pasados suspendió la colaboración aérea de su gobierno con la DEA y ha proclamado una república bolivariana que, ante los ojos de Estados Unidos, es una amenaza porque pretende unir cinco naciones en un solo movimiento.

La respuesta no se hizo esperar y McCaffrey alertó a los políticos latinoamericanos al anunciar que está investigando un eje Castro-Chávez para subvertir el orden y que hay dinero de narcotraficantes en sus acciones.

Hace apenas unos días, la última semana de agosto, el General Barry se reunió con Menem y su equipo de colabora-

dores, dando a conocer que el 60% de los colombianos están de acuerdo con una intervención estadounidense en su territorio, sin aclarar que la encuesta fue selectiva y se aplicó en Bogotá, Cali y Medellín, dejando al margen a Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga, centros donde se siente y sufre la guerra; que no entendía por qué Pastrana negocia con los guerrilleros, si el 30 o 40% del territorio lo tienen los insurgentes y hay que recuperarlo. Agregó que la guerrilla nunca tuvo la voluntad de negociar y que sólo ambiciona el poder.

Estas aseveraciones ganaron adhesiones inmediatamente; una de ellas fue de Carlos Saúl Menem, quien ofreció apoyo militar en caso de consumarse la invasión y avaló tácitamente la evaluación que hacen de Hugo Chávez.

La labor continúa, los halcones presionan y han obtenido la anuencia del presidente Clinton para poner en marcha el *Grupo de Trabajo de Colombia*, bajo la dirección de Thomas Pickering, subsecretario de Estado para Asuntos Políticos; Randy Beers, subsecretario asistente de Estado para Asuntos Antinarcóticos; Brian Sheridan, secretario adjunto de Defensa para Operaciones Especiales. A ellos se les suman Peter Romero, ligado a los Asuntos Hemisféricos; Mary Lee Warren, viceprocuradora adjunta; Alan Larson, que se relaciona a Asuntos Económicos y empresariales y Mark Schneider, director para Latinoamérica y el Caribe de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID). La actividad de estos funcionarios es organizar reuniones en los distintos países latinoamericanos, conjuntar opiniones, monitorear los avances políticos electorales y tener lista, antes de la Navidad de 1999, una sorpresa, ¿se imaginan cuál será?

Martínez Cunill dibuja un escenario catastrófico en caso de una invasión con soporte tecnológico, estilo Kosovo, cuyo resultado puede arrojar una balcanización del país, dejando el norte colombiano en manos de los paramilitares, el centro bajo el dominio del gobierno y el sur controlado por la guerrilla. Este desajuste quebraría las frágiles democracias en pro-



ceso de construcción en Venezuela y Ecuador, pero a su vez justificaría que Estados Unidos se quedara en Panamá, con el firme propósito de coordinar acciones para atajar el narcotráfico y la expansión de las guerrillas, apoyado, claro está, por los gobiernos de Mireya Moscoso y Fujimori.

No es descabellada la afirmación del analista mencionado, si la dejamos como nubes que se posicionan sobre lo que está ocurriendo; si en ese contexto hipotético ubicamos el accidente ocurrido el día 11 de septiembre en Tarapoa, kilómetro 65, entre los caseríos Paz y Bien, Ecuador, sitio cercano a las fronteras con Colombia, donde un comando de secuestradores plagió 12 extranjeros y más tarde se internaron en la selva, la posibilidad de acusar a uno de los actores en conflicto en Colombia crece y el alud de acusaciones se cargan en contra de las FARC.

Los voceros del gobierno estadounidense señalan y censuran a las FARC como los ejecutores del plagio; las FARC negaron que sean las responsables y, por voz de Iván Ríos, líder de un frente en las selvas del sur, precisó que la guerrilla mantiene el compromiso de no realizar acciones militares fuera del territorio nacional para no dificultar la negociación de la paz. Mientras las acusaciones transitan por el camino de los señalamientos e involucraciones hostiles, en la base de Manta, Ecuador, aviones, helicópteros y una columna especializada, asesorada por los militares estadounidenses que permanecen en ella, ya iniciaron los rastreos y hostilidades en la frontera colombo-ecuatoriana, donde se sabe que existen grupos de influencia de las FARC.

A este incidente hay que agregarle otro de singular sello, la amenaza frontal del jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño, a algunos miembros de la Guardia Nacional de Panamá, a quienes acusó de apoyar la guerrilla colombiana. La amenaza de Castaño va dirigida contra Mireya Moscoso, presidenta de este país, quien recién asumió las responsabilidades administrativas y que se encuentra en

---

una disyuntiva por las presiones internas y externas para que el canal se recupere, por una parte, o de lo contrario, que abra la posibilidad de instalar una base militar antinarcóticos.

Se puede leer este acontecimiento como un puente de diálogo y entendimiento entre los paramilitares y la CIA, para ir creando los conflictos detonantes de una intervención. En el círculo de los especialistas sobre estudios de Colombia hay una sospecha sobre el secuestro de los extranjeros en Ecuador; la hipótesis más contundente es que los paramilitares, con la complicidad de los militares estadounidenses en Manta, ingresaron al territorio ecuatoriano, planificaron el asalto y lo llevaron a cabo, tomaron una ruta hacia Colombia en cuatro grupos separados para distraer y confundir la persecución y anular la línea de seguimiento al escuadrón secuestrador, cargándole la responsabilidad a los grupos de las FARC que se movilizan en el sur de Colombia.

Para el caso de Panamá, los paras promueven una incursión por el lado del Darién, en una provincia de 60 mil habitantes, con signos patéticos: 62% en la pobreza, que subsisten con la pesca o la agricultura y cuya extensión boscosa se extiende sobre el 22% del territorio panameño. La pregunta es ¿qué interés hay en esta declaración de guerra?

Hay muchas conjeturas, señalemos algunas.

a) Alterar las fronteras de Colombia con un conflicto que rompa los límites nacionales y provoque una inestabilidad regional.

b) Que la confrontación se dé entre ejércitos nacionales a fin de que, en una intervención estadounidense, el punto de ataque sean las guerrillas, ya localizadas.

c) Involucrar en este proceso a Venezuela para detener el proceso de Hugo Chávez y el desarrollo de la Constituyente. Esta premisa se liga a las declaraciones de Castaño, quien asevera que los militares venezolanos protegen a los guerrilleros colombianos en la zona del Catatumbo cuando son atacados por los paras, utilizando, incluso, baterías aéreas.



d) La sospechosa declaración de los paras, de alguna manera, busca involucrar a Panamá en un conflicto que es exclusivo de Colombia, pero el argumento que esgrimen es que sin la presencia de las tropas de Estados Unidos en la región, en especial en la zona canalera, la guerrilla podría agravarlo, pues el propósito de Chávez en Venezuela, las FARC en Colombia y Fidel Castro en Cuba es construir un bloque contratendencial a la política estadounidense.

Si nos situamos en la acera del frente se prefigura otro escenario, donde la voluntad política de los insurgentes y del gobierno de Pastrana dan muestra de flexibilidad, a fin de aproximarse a un acuerdo para iniciar las negociaciones en firme; que el *impasse* que existe hoy no es insalvable, sino un obstáculo que se presenta en todo conflicto de la envergadura que enfrenta Colombia. Que las presiones que ejercen los ciudadanos en Panamá sobre Mireya Moscoso para que resuelva favorablemente y respetando la soberanía impida un nuevo arrendamiento de la base militar y resten fuerza a su idea de apadrinarse con los estadounidenses. Que las movilizaciones en Ecuador, que son muchas este año, agreguen a su demanda el principio de no intervención y respeto a la autonomía de Colombia para que maneje su conflicto; esto limitaría la acción belicosa de Estados Unidos y daría una nueva oportunidad a los actores conflictuados a que nos den una nueva lección de cómo negociar en la adversidad y en un entorno enrarecido, como el que hoy se dibuja en Sudamérica.

La voluntad para el diálogo se está estructurando, ya hay pronunciamiento del partido liberal, en voz de Horacio Serpa, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe y María Emma Mejía para que la Internacional Socialista interceda como mediadora en las negociaciones; no se descarta tampoco una misión de las Naciones Unidas, alguien debe ser el que convoque y equilibre la mesa de negociación y ese alguien está en el ámbito internacional.

---

## Duelo de Estrategias

Mientras el escenario toma forma y se va adecuando como un mapa político, las fuerzas políticas en conflicto comienzan a cambiar de estrategia; por un lado, las Fuerzas Militares de Colombia, apoyadas en la logística que le proporciona el gobierno de Clinton, han decidido no confrontar en línea con las FARC ni el ELN porque estarían en desventaja, dado lo escarpado del terreno y los desplazamientos de los guerrilleros por zona boscosa; a cambio del abandono de la estrategia confrontativa, han instrumentado otra, la de contraatacar, cuyo eje estratégico consiste en seguir por aire a las columnas guerrilleras cuando cometen un atentado o emboscada, a través de un avión fantasma, gracias a sensores de calor infrarrojo. Esa aeronave cuenta con una computadora que permite establecer las coordenadas exactas del objetivo y orienta el ataque de varios helicópteros artillados Black Hawk, tipo Arpía, acondicionados con modernos equipos de visión y seguimiento nocturno (*Cambio*, 1999).

Los resultados son significativos para el saldo de la guerra; este año, los militares han realizado varias operaciones con una ofensiva aérea y terrestre, destacándose la de Eclipse negro en febrero y Llanura en mayo, las dos en Arauca; más tarde se llevó a cabo la Némesis en junio en la selva del Vichada y la más cruenta fue Independencia en julio. En cada una de las operaciones, el ejército nacional graba en video los ataques y los resultados de la operación para satisfacer dos objetivos, por un lado, perfeccionar la próxima operación y; por otro, divulgar a través de los medios de comunicación los saldos, a fin de impactar en la guerra psicológica.

La desventaja tecnológica no es impedimento para que las FARC y el ELN adecuen sus estrategias al nuevo mapa confrontativo; ante la persecución por aire, han decidido incrementar el número de secuestros, porque los reos de guerra les sirven de escudo ante los ataques indiscriminados y exac-



tos de los helicópteros. Si son alcanzados por las balas de los Black Hawk, la sociedad civil lo censuraría, porque el alarde discursivo de su precisión no es congruente con las bajas civiles o de soldados secuestrados. Y si no son rescatados, son parte de la negociación para el canje de presos políticos.

En un juego de estrategia se observa, casi siempre, que la tecnología jamás va a suplir la capacidad creativa del ser humano. Aunque a corto plazo la tecnología es precisa y cerceña, la inteligencia responde con nuevos argumentos que ponen en entredicho el avance tecnológico.

El resultado de esta confrontación estratégica es que, en lo que va del año 1999, las acciones subversivas se han incrementado en un 23% en comparación con los años 1997 y 1998, o sea, 300 acciones frente a 236 y 237 de años anteriores (N. Martínez, 1999). Las masacres a poblaciones son parte de las acciones paramilitares; los ataques a cuarteles y secuestros son compartidos por las FARC, ELN y los paramilitares. Los Elenos eran los que más plagiaban; hoy las cifras casi se emparejan, porque las FARC han optado por esas medidas político-militares para enfrentar la desventaja tecnológica.

La guerra de baja intensidad continúa su curso, el hostigamiento crece, la difusión o guerra psicológica descarga su alud de desinformación para crear un ambiente ennegrecido, las Fuerzas Armadas de Colombia dan a conocer que la guerra la van ganando en el ámbito militar y en el jurídico, porque este año les han propinado 1,000 bajas, constatadas y grabadas por el personal del ejército, a los insurgentes; aunque resalta que tras de esa cifra hay una cantidad igual o mayor de muertos que los insumisos armados esconden para no revelar su desgracia (Hurtado, L., 1999).

A todo ello, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) coadyuva de manera beligerante a favor de una intervención, despertando la admiración por lo inaudito de su declaración, al decir... «que las Fuerzas Armadas colombianas necesitan helicópteros y apoyo logístico

---



para ser operativas en zonas sumamente inaccesibles donde se han expandido las actividades del narcotráfico, de ahí que estoy de acuerdo a que la cooperación con los Estados Unidos crezca» (Gaviria, 1999).

Esta declaración alineada del Secretario de la OEA demuestra que la reelección de Gaviria en este organismo fue negociada a cambio de que respaldara la iniciativa de Bill Clinton, quien está sumamente nervioso por lo que acontece en Colombia, no por la magnitud del problema, sino porque la tensión del conflicto puede desmejorar la campaña presidencial el próximo año y los demócratas y los republicanos pueden manejar eficazmente la política débil y desastrosa del gobierno a su favor.

La conclusión parcial es que el entorno internacional cierra pinzas contra los insurgentes; los actores probetas son una mezcla de narcotraficantes, terratenientes, militares y sicarios que engendraron las Fuerzas Armadas y hoy las comparte con la CIA; que la paz está en lista de espera y los verdaderos actores se siguen confrontando, ¿hasta cuándo? Ojalá el tiempo histórico de Colombia diga: para mañana. ■

- Aarón Raymond (1993), *Pensar la Guerra, Clausewitz*, Tomo I y II. Edit. Ministerio de Defensa, España.
- Arrieta, Carlos, Orjuela, L., Sarmiento, E., Tokatlian J. (1993), *Narcotráfico en Colombia*, Edit. Ediciones Unidas/Tercer Mundo editores. Colombia.
- Cadena Roa, Jorge (1999), «Acción colectiva y creación de alternativas», en *Chiapas*, cuaderno 7. Edit. Era/Unam, p.p163-190
- Cambio* (1999), «Joyoy Muerte el polvo», en *Revista Cambio*, Colombia, del 6 de septiembre.
- Castaño, Carlos (1999), Entrevista, *Diario El Meridiano de Córdoba*, Colombia.
- (1999), Carta dirigida a Jaime Restrepo Cuartas, Rector de la Universidad de Antioquia, 18 de agosto, mimeo.

## Bibliografía



## Bibliografía

- Colombia Libre, Página electrónica de los paramilitares en Colombia. <http://www.colombialibre.org/hmtm>.
- Gandasegüi, Marco, (1999), <http://mail.ufg.edu/red/actualidad1html> y [actualidad 2html](http://mail.ufg.edu/red/actualidad2html).
- Garretón, Manuel Antonio (1995), *Hacia una nueva era política. Estudio sobre las democratizaciones*. Edit. FCE, Chile.
- Gaviria, César (1999), Entrevista, en periódico *El País*, España, 8 de septiembre.
- Giddens, Anthony (1997), «La vida en una sociedad post-tradicional» en *Revista Ágora*, Núm. 6, verano. Pág. 5-61. España.
- Howard, Ross Marc (1995), *La cultura del conflicto*, Edit. Paidós, Bs. Aires.
- Hurtado, Lilibian (1999), «Estamos ganando la Guerra: FF. MM.», nota sobre entrevista al General del Ejército Néstor Ramírez Mejía. *El Heraldo*, edición 10 de septiembre. Colombia.
- Marulanda, Manuel (1999a), Carta dirigida al presidente Pastrana. *Periódico El Tiempo*, 28 de agosto. Bogotá.
- (1999b), Carta dirigida al presidente del Congreso, Miguel Pinedo. *Periódico El Tiempo*, 28 de agosto. Bogotá.
- Martínez Cunill, Daniel (1999), Las fronteras calientes de Colombia, en *Revista Milenio*. Pág. 44-45. Agosto 2. México.
- Martínez, Néstor H. (1999), Parte de las acciones subversivas en Colombia. *El Tiempo*, 10 de septiembre. Colombia.
- Najmanovich, Denise (1995), «El lenguaje de los vínculos. De la independencia absoluta a la autonomía relativa», en *Redes: el lenguaje de los vínculos*, Elina Dabas y Denis Najmanovich. Edit. Paidós, p.p. 33.
- Salazar, Robinson (1998), *El desafío organizacional de las fuerzas insurgentes en América Latina. Estudio sobre el FSLN, FMLN y URNG en la pospaz*, tesis de doctorado y en prensa en la Edit. UFG de El Salvador, C.A.
- Serrano Gómez, Enrique (1998), *Consenso y conflicto. Schmitt, Arendt y la definición de lo político*, Edit. Cepcom. México.

Para la elaboración de este ensayo se contó con la colaboración de Daniel Martínez Cunill, analista de la Revista *Milenio*, quien ha viajado en varias ocasiones a entrevistar a la comandancia de la FARC; a militantes de la FARC y el ELN, quienes me han hecho llegar el material necesario y las precisiones de los lugares y armamento; a los amigos de la revista electrónica Thema, Hernando Franco, su editor, <http://www.colombia-thema.org> y del banco de datos que ha organizado la Red de Investigadores Latinoamericanos por la Democracia y Autonomía de los Pueblos <http://mail.ufg.edu/red>